

Territorios y recursos naturales: el saqueo versus el buen vivir

Broederlijk Delen 



Quito, abril 2008

**Territorios y recursos naturales:
el saqueo versus el buen vivir**

Producción: *Broederlijk Delen*

Edición: *Agencia Latinoamericana de Información - ALAI*

Revisión de textos: *Sally Burch, Eduardo Tamayo G., Juan Pablo Corral*

Corrección: *Paola de la Vega*

Ilustración de portada: *Jano*

Diseño de portada: *Verónica León*

Diseño y diagramación: *Serafín Ilvay*

Impresión: *Gráficas Silva*

ISBN: 978-9942-01-660-7

Quito, abril 2008

Broederlijk Delen

Huidevettersstraat 165

1000 Brussels, Bélgica

T. (32) (0)2/502.57.00 F. (32) (0)2/502.81.01

info@broederlijkdelen.be

<http://www.broederlijkdelen.be/>

Agencia Latinoamericana de Información - ALAI

Casilla 17-12-877

Quito, Ecuador

T. (593 2) 250 2074 F. 250 5073

info@alainet.org

<http://alainet.org>

Los artículos y las opiniones vertidas en este libro son de estricta responsabilidad de sus autores/as y no reflejan necesariamente el pensamiento de las entidades editoras. Pueden ser reproducidos, a condición de que se mencione debidamente la fuente.

Indice

<i>Introducción. Las venas (re)abiertas de América Latina</i>	5
<i>Prefacio, Joan Martínez Alier</i>	11
I. Visiones e intereses en disputa	
Los recursos naturales como mercancía, <i>Marco Arana Zegarra</i>	19
De deudores a acreedores, <i>Aurora Donoso Game</i>	32
La madre naturaleza desde la cosmovisión Maya, <i>Rodolfo Pocop Coroxon</i>	39
II. Tendencias político-económicas en el control y manejo de los recursos naturales	
Los alcances de la deuda ecológica, <i>Hildebrando Vélez</i>	49
Plan Colombia, plan de muerte, <i>Diana Murcia</i>	57
Guatemala: Libre comercio y TLC versus integración de los pueblos, <i>Natalia Atz Sunuc</i>	66
Ecuador. Desplazamiento y muerte: la otra cara de la represa Baba, <i>Germán Jácome López</i>	72
III. Estrategias de defensa de los recursos naturales	
La justicia ambiental en la estrategia del ecologismo popular, <i>Lucio Cuenca</i>	79
Las luchas del ecologismo popular en Ecuador, <i>Alexandra Almeida</i>	85
Colombia: Las nuevas soberanías, <i>Hildebrando Vélez</i>	92
La minería en Honduras: un atentado contra la salud pública, <i>Juan Almendares</i>	98

Dos casos de resistencia a la contaminación tóxica en el Ecuador, <i>Esperanza Martínez</i>	106
Ecuador: La lucha de Sarayaku contra las petroleras, <i>Betsy Santi Gualinga</i>	112
Desde lo local a lo mundial en defensa de los bosques, <i>Ricardo Carrere</i>	115
Bolivia: Defensa del territorio frente a la Repsol, <i>Rubén Cuba</i>	122
Bolivia: Control comunitario de los recursos naturales, <i>Fernando Garcés</i>	130
Redes del Norte: Aliadas estratégicas, <i>Geneviève Tournon</i>	134
El caso del Congo: “celular sin sangre”, <i>Thomas Craenen</i>	137
Transparencia y rendición de cuentas, <i>Laura Furones Fragoso</i>	141
Responsabilidad social empresarial: Maquillando el saqueo, <i>César Padilla</i>	146

IV. Alternativas para un manejo sostenible

La soberanía en tiempos de globalización <i>Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres</i>	155
Uso alternativo de las fuentes energéticas en Cuba <i>Ángel Luis Brito Sauvanell</i>	166
Colombia: Los recursos naturales desde la espiritualidad e interculturalidad <i>Aparicio Ríos</i>	170
Bolivia. Defensa colectiva de los derechos socio-ambientales, <i>Elizabeth López</i>	181
Un camino alternativo: El Tratado Comercial de los Pueblos, <i>Miguel Lora</i>	184
Hacia una sociedad post-petrolera, <i>Elizabeth Bravo</i>	196
Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución? <i>Jürgen Schuldt, Alberto Acosta</i>	204

Bolivia. Defensa colectiva de los derechos socio-ambientales

Elizabeth López
CEPA - Bolivia

La región de Challapata

El Municipio de Challapata está ubicado en la Provincia Avaroa del Dpto. de Oruro - Bolivia. Con una población aproximada de 18 mil habitantes, su principal actividad económica es la producción agrícola y pecuaria. Las características de su ecosistema y su elevada producción agropecuaria le han servido para ser reconocido como parte del triángulo lechero del Altiplano Central.



La producción agropecuaria en la zona ha sido posible por la administración y gestión de la Represa de Tacagua, que beneficia directamente a 1.200 familias. La represa fue construida en 1957 y tiene una capacidad de almacenaje de 45 millones de litros de agua, con los que se irrigan alrededor de 7.000 hectáreas, a través de varios canales de distribución. En definitiva, la presencia de la represa ha permitido desarrollar en la zona una próspera industria lechera, que en los últimos años ha incursionado en la elaboración de derivados.

Por todas estas razones, en 2003, el gobierno central declaró a la zona de Challapata, como “Región industrial lechera del occidente boliviano”, y en 2004 se declaró a toda la Provincia Avaroa como “Zona ganadera del occidente boliviano”.

Minería y agricultura

En 1994 la empresa canadiense Orvana, en riesgo compartido con una empresa boli-

viana, pretendió realizar explotación minera en la zona. Tras instalar el campamento, se intentó convencer a la población con una agresiva campaña propagandística que incluía el uso de diversos elementos culturales de la zona; a pesar de ello, y luego de una serie de movilizaciones y de la toma de conciencia de la población, se logró paralizar el ingreso de esta minera a la región.

Casi doce años más tarde, por el alza del precio del oro, en 2006, nuevamente otra empresa minera pretendió ingresar en la zona. Se trató de la canadiense, Castillian Resources Bolivia S.A, dueña de la denominada mina Achachucani (que en idioma local significa “viejo de la vara de oro”). Ante este nuevo intento la respuesta de las comunidades volvió a ser contundente con varias movilizaciones, bloqueos, marchas y tomas pacíficas de las instalaciones mineras; así consiguieron postergar el inicio de las operaciones mineras y el compromiso del gobierno de velar por la seguridad de la región y la actividad agropecuaria.

Las principales razones de oposición de la población, tienen que ver con el recurso agua. La empresa usaría grandes volúmenes de agua, produciría la emanación de enormes cantidades de polvos y gases, y utilizaría diversos químicos y reactivos; todo esto alteraría directamente el ecosistema circundante y su medio de vida.

En 2007, los comunarios lograron que a

través de la resolución del gobierno local (Prefectura) N° 205/07, del 23 de mayo, se instruyera el retiro de la empresa de la zona por no contar con la Licencia Social correspondiente. Ante esta resolución la empresa respondió con un Recurso de Revocatoria. La presión de las comunidades continúa y el ingreso de la minera sigue en espera.

La resistencia en la adversidad

Challapata es sólo un ejemplo del proceso de resistencia iniciado en varias regiones mineras de Oruro y del país contra el saqueo de los recursos naturales, el empobrecimiento de las regiones y la degradación ambiental. Decimos “en la adversidad”, porque en Bolivia existe toda una normativa que define a la minería como de “prioridad nacional”.

La figura que describimos anteriormente de la Licencia Social, en realidad no es una figura jurídica o de validez, pues la consulta no es vinculante. Sin embargo, la fuerza de la organización, el respaldo de otras organizaciones comunales, el intercambio de conocimientos y experiencias con comunidades que viven procesos de resistencia, y el compromiso de algunos gobernantes con el sector campesino, han logrado frenar el ingreso de esta minera. Este caso se constituye en un ejemplo y una gran esperanza para otras comunidades que cada día ven amenazadas sus tierras y recursos por la

presencia de mineras.

Aprendizajes de la lucha por el respeto a los derechos socio-ambientales

Para las comunidades campesinas, la defensa de sus territorios y sus recursos pasa necesariamente por la defensa de su medio ambiente. De hecho, existe una creciente articulación de las comunidades campesinas en torno a diversas demandas ambientales.

En este proceso de resistencia se podrían destacar dos niveles de información e intercambio de experiencias, como motores y promotores de la defensa ambiental. El primer nivel es el trabajo en el intercambio de información entre comunidades a nivel local y nacional; y el segundo nivel, en el intercambio entre comunidades de otros países con historias similares, como son los casos de Perú y Ecuador. Este proceso local y regional ha ayudado a fortalecer la resistencia, puesto que se parte del reconocimiento de que existen muchos pueblos con problemas similares que deben unir fuerzas, encontrar más aliados y regionalizar la lucha.

A nivel político

Partimos de la reflexión de que el tema ambiental y de gestión de recursos es un tema político, y que está relacionado no so-

lamente con implementar medidas correctivas, sino con el diseño de políticas de gestión de recursos. Se trata de sacar la problemática minera exclusivamente del ámbito minero, y trasladarla al ámbito nacional y regional, sumada a la discusión de visiones de desarrollo y del futuro de los pueblos. En definitiva, se busca regionalizar la discusión a partir de los mismos actores. Por ejemplo, en este momento es necesario influir y participar del análisis y discusión de la nueva política minera, el uso de los recursos, la búsqueda de alternativas a la extracción minera, los límites de la minería, etc.

Si no existe una reflexión participativa sobre el uso y gestión del “recurso”, no se puede pensar en un uso sostenible. Y esto pasa inevitablemente por la discusión del tema territorial y de la “propiedad de los recursos”, no sólo en las regiones indígenas, sino con organizaciones sindicales e incluso urbanas.

Para terminar, quisiera insistir en que toda acción en defensa de los derechos socio-ambientales es ante todo una acción política y colectiva, en la que el grueso de la población tiene que vincularse como la única manera de trascender el ámbito local.

Elizabeth López es miembro del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), organización que durante los últimos doce años trabaja con las organizaciones de base en defensa de sus derechos socio-ambientales.